

comunidades lesbianas también han rechazado las imágenes hegemónicas de feminidad y están luchando por desarrollar una nueva estética femenina. Un rasgo sorprendente de estas comunidades es el grado en que han conseguido superar la identificación opresiva de belleza y deseabilidad femenina con juventud: aquí, los rasgos físicos de la madurez —líneas de «carácter» y cabello gris— no sólo no disminuyen la belleza de una mujer, sino que pueden incluso realzarla. Está creciendo una literatura popular de la resistencia, alguna de ella analítica y reflexiva, como *The Obsession* de Kim Chernin, alguna orientada hacia la autoayuda, como *Transforming Body Image, Learning to Love the Body you Have*, de Marcia Hutchinson⁵¹. Esta literatura refleja en cierto modo un sentimiento semejante a uno anterior, de callada desesperación, al cual Betty Friedan dio voz en *The Feminine Mystique*. Y tampoco debíamos olvidar que existe un movimiento de mujeres que ha empezado a cuestionarse críticamente el significado de feminidad, si bien aún no en la presentación corporal del yo (*self*), si en otros ámbitos de la vida. Nosotras, las mujeres, no podemos empezar la revisión de nuestros propios cuerpos hasta que aprendamos a leer los mensajes culturales que inscribimos en él diariamente y hasta que nos demos cuenta de que, aun cuando la maestría de las técnicas disciplinarias produzca un resultado final triunfante, seguimos siendo sólo mujeres.

⁵¹ Marcia Hutchinson, *Transforming Body Image, Learning to Love the Body you Have*, Trumansburg, NY, Crossing Press, 1985. Véase también Bordo, «Anorexia Nervosa», art. cit.

CONTROL FORMAL:... Y EL DERECHO PENAL DE LAS MUJERES

ELENA LARRAURI

II

El control que ejerce el derecho penal no debe verse como algo ajeno a lo expuesto en el control informal referido a las mujeres. Retar la idea de funcionalidad del derecho penal no debe llevar a la idea, igualmente extemporánea, de que no existe ninguna relación entre lo protegido por el derecho penal y la forma en que está estructurada la sociedad actualmente.

El derecho penal ha sido tradicionalmente objeto de críticas por estudiosas feministas. Tres han sido los reproches: *a.* la deficiente regulación de los delitos que tienen a la mujer como víctima; *b.* la insuficiencia de tipos penales que protejan a la mujer; *c.* la irregular aplicación (o inaplicación) en los Tribunales de determinados delitos contra las mujeres.

Estas críticas se han intentado paliar con la reforma del Código penal realizada en 1989, y sin duda se ha dado alguna zancada. Sin embargo, la alianza de las mujeres con el derecho y el sistema penal es más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista.

Tomemos como ejemplo de la primera crítica —deficiente regulación— los *delitos contra la libertad sexual*.

Una de las objeciones tradicionalmente dirigidas a los delitos que protegen a la mujer ha sido su carácter de delitos privados. Esta regulación exige denuncia y admitía el perdón de la parte ofendida.

Las críticas que, desde una perspectiva feminista, acostumbran a dirigirse a esta regulación, argumentan que el mensaje que puede ser leído es que un delito contra la mujer no es, a diferencia del resto de los delitos públicos, un delito contra la sociedad o carece de la suficiente gravedad para interesar al Estado.

Ello ha llevado a determinadas mujeres feministas a reclamar

la necesidad de que sea eliminada la exigencia de interposición de denuncia para ser, como la mayoría de los delitos, procesado de oficio.

Reconociendo la certeza de este análisis, deben también recogerse otras voces feministas que insisten en que la consideración de los delitos sexuales como delitos públicos no es necesariamente una victoria para las mujeres ¹.

Ha sido repetidamente puesto de relieve que la actitud de la policía, el trato en el Tribunal que examina la moralidad de la víctima (para ver si es o no una víctima apropiada), su resistencia (para ver si es o no una víctima inocente), reticente a condenar sólo por el exclusivo testimonio de la mujer (dudas acerca de la credibilidad de la mujer), etc., son experiencias humillantes para la mujer, que aparece ella como juzgada.

En consecuencia, no puede acogerse sin asomo de duda la pretensión de que los delitos sexuales sean delitos perseguibles de oficio, asumiendo que con ello se están defendiendo de mejor forma los intereses de las mujeres.

Planteemos la segunda cuestión: la eliminación del perdón de la parte ofendida. Ello, en general, ha sido aprobado por toda la doctrina penalista y por los sectores feministas ². El argumento esencial eran las presiones que podía sufrir la víctima para conceder el perdón («venta de perdones»).

La institución del perdón es relevante, ya que, a pesar de que la atención siempre se concentra en las violaciones estereotípicas, debe repetirse que un alto porcentaje de agresiones sexuales se produce entre conocidos. En ellos la mujer puede y debe tener la posibilidad de jugar un rol activo, sin que, tan pronto haya realizado una denuncia, sea reducida a mera espectadora de «su» caso.

Pienso que sólo quien no tiene ninguna duda en que el Estado sabe siempre y en todo momento qué es lo mejor para la mujer, valorará esta reforma como enteramente positiva. Yo, que carezco de esta confianza en el Estado, observo cómo la pretendida mayor

¹ Una exposición de los pros y contras puede verse en Díez Ripollés (1985: 189-194); desde una perspectiva feminista, véase la discusión en Librería de Mujeres de Milán (1991:63-93).

² Para la opinión de la «doctrina penalista» me he basado en Boix (1989); Díez Ripollés (1982; 1985; 1991) y Muñoz Conde (1989). He tomado como representativa de la «perspectiva feminista» (jurídica) el VI Congreso de Mujeres Abogadas.

protección que se concede a la mujer se logra a costa de anular su capacidad de decisión ³.

Es ciertamente indeseable que la mujer se vea presionada, pero ello desde luego puede seguir ocurriendo aun cuando se elimine el perdón. A la mujer se la puede, por ejemplo, coaccionar para que cambie su testimonio, y el derecho penal ha reaccionado ante estas situaciones introduciendo un nuevo artículo que castiga esta intimidación (art. 325 bis) y no eliminando el testimonio de la víctima. Pues bien, en este artículo se hubiera podido castigar asimismo el ejercicio de las presiones destinadas a conceder el perdón.

Del mismo modo, la expresión «venta» de perdones da una imagen peyorativa. ¿Acaso es necesariamente negativo que una mujer prefiera una reparación económica a la condena en la cárcel del agresor? Y ello no por meras consideraciones mercantilistas, como se acostumbra a dar a entender, sino porque determinadas violaciones no tienen para la propia víctima una gravedad tal que justifique 12 años de cárcel, en otros casos porque la mujer prefiriese verse compensada materialmente, o sencillamente porque está en contra de la cárcel.

Otro aspecto que parece haber gozado de aprobación generalizada ha sido la reforma de la anterior redacción («el que yaciera con una mujer») por la actual formulación neutra («Comete violación el que tuviere acceso carnal con otra persona [...]») que posibilita que la mujer sea sujeto activo y el hombre sujeto pasivo.

Sin embargo, de nuevo no todas las feministas estarían dispuestas a unirse al coro laudatorio.

Al respecto señala Los (1992:20), refiriéndose a la reforma penal realizada en Canadá, que también operó este cambio, cómo

³ Para aclarar el argumento debo explicitar la premisa ideológica de la cual parto. No comparto la visión mayoritaria de que la apropiación del *ius puniendi* por parte del Estado fuera realizado fundamentalmente para «limitar la venganza privada». Más bien pienso que el poder central «real» utilizó el derecho penal para absolutizar su poder contra el poder disperso de los poderes locales, de los nobles, de la Iglesia, etc... Esta convicción la he extraído de, aun cuando no se si sería compartida por, Tomás y Valiente (1969).

Partiendo de esta premisa, y atenta a que nuestra sociedad no es obviamente la misma en la que tuvo lugar la centralización y apropiación del *ius puniendi*, pienso que se debería proceder a una nueva «redistribución» del poder de castigar, limitando el alcance del Estado y dando una mayor participación a las ciudadanas.

ello se vio como un atentado por las feministas. Ya que el derecho penal, al seguir la lógica jurídica de la igualdad y partir de un género neutro, estaba oscureciendo el hecho de que la violación es un delito que comete un género contra otro.

Cualquiera puede cometer una violación: es el mensaje que da el Código penal, con lo cual queda difuminado que son los hombres quienes la realizan contra las mujeres, y que alguna responsabilidad de las estructuras sociales existirá para explicar el hecho «paradójico» de que las mujeres no violan⁴.

Adicionalmente, el género neutro oculta que lo que es o no violación se sigue construyendo desde un punto de vista masculino (Mackinnon, 1983)⁵.

La definición de violación implica la «penetración de un órgano masculino», ya que la introducción de objetos distintos del órgano masculino son agresiones sexuales (art. 430). Sin embargo, esta distinción es considerada totalmente artificiosa desde el punto de vista femenino, pues en ambos casos la mujer se siente violada. Pero sólo en el primero, donde hay un pene, se admite la violación.

O la discusión actual, que pretende eliminar el acceso bucal (*fellatio*), introducido en la reforma de 1989, de la violación, señalando que no tiene la misma gravedad. ¿Para quién? De nuevo parece que sólo cuando hay una vagina se entiende cometida una violación (un acceso carnal).

Un ejemplo ulterior: los *delitos de pornografía* (art. 432). De nuevo aquí se ha aplaudido la restricción de que estas conductas sólo se castiguen cuando se realicen «entre menores de 16 años o deficientes mentales».

Sin embargo, los aplausos de algunas feministas son más ténues. El eslogan: «La pornografía es la teoría, la violación es la práctica» refleja precisamente la preocupación existente en am-

⁴ Hay que hacer hincapié en que no es sólo una cuestión de fuerza física. La mujer podría, si éste fuese el único factor, violar a menores de edad. El hecho de que tampoco éste sea un comportamiento frecuente, indica que la violación es un comportamiento aprendido por los hombres como una forma de mostrar y ejercer el poder por medio de la sexualidad.

⁵ Analizo la violación tal como está regulada en el texto normativo. Si estudiase cómo se está aplicando efectivamente en numerosos casos, probablemente suscribiría que: «La distancia existente entre las violaciones sexuales de las mujeres y la violación en sentido técnico jurídico capta la imposición de la definición de alguien más sobre las experiencias de las mujeres. Desde el punto de vista de las mujeres, la violación no está prohibida, está regulada» (Mackinnon, 1983:651).

bientes feministas acerca de los efectos perniciosos de la pornografía sobre la imagen de las mujeres.

No es sólo la discusión de si la pornografía causa o no más agresiones sexuales. Éste es un argumento incomprobado y probablemente improbable⁶. Lo que se afirma es que la pornografía degrada a la mujer, legitima el uso de la violencia como una forma de placer, erotiza la dominación y las diferencias de poder (Mackinnon, 1987:171).

Tampoco se trata de afirmar que las mujeres pretenden coartar la libertad de expresión prohibiendo toda manifestación de arte —si es que puede llamársele así—, sino de discutir, de nuevo, el mensaje simbólico que emite el Código penal cuando entiende que las únicas víctimas dignas de protección son los menores o deficientes mentales.

El hecho de que degrade a la mujer al presentarla siempre sometida, de que incite al odio, ha llevado a diversas propuestas⁷. Brants y Kok (1986:281) proponen extender el artículo existente en el Código penal holandés que castiga los insultos que inciten al odio, al trato discriminatorio, y acciones violentas contra grupos de personas por razón de raza o religión, incluyendo también la mención «por razones de sexo»⁸.

Y, por último, los olvidados *delitos relativos a la prostitución*, que han permanecido esencialmente inalterados en las sucesivas reformas del Código penal. Tiene razón Mosman (cit. por Smart, 1989:21) cuando señala que el derecho penal es relevante tanto por lo que incluye como por lo que excluye.

En el derecho penal español la prostitución está descriminalizada. Ello es coherente con una perspectiva liberal que define éste como uno de los clásicos delitos «sin víctima».

⁶ Como afirman Brants y Kok (1986) explicando el debate existente en Holanda «En tanto que el movimiento de mujeres se refería al refuerzo ideológico de los valores masculinos imperantes (poder, agresión, posesión, habilidades sexuales, etc.), que también subyacen en los delitos de violación, los oponentes, predominantemente masculinos, pensaban en una dirección más lineal, pidiendo pruebas de que el consumidor de pornografía saldría después a violar a alguien».

⁷ Una de las más conocidas ha sido la de Mackinnon (1987). Para una discusión más amplia me remito a Osborne (1989:29); véase también Malem (1992).

⁸ En España, el Grupo Socialista propuso la introducción de un artículo que castigue el «[...] uso público de símbolos o emblemas de doctrinas o ideologías que promuevan el odio o la discriminación racial o xenófoba» (*El País*, 21 de enero de 1993). Pero se olvidó del sexo.

Sin embargo, de nuevo, en las discusiones feministas el análisis es más complejo. Se afirma que es una quimera la imagen de un delito sin víctima y se apunta a la mujer que ejerce la prostitución no sólo como víctima, sino como «doble víctima» de la situación y de la ausencia de regulación.

Se destaca que la hipocresía social de no criminalizar y defender al propio tiempo la no legalización produce que la mujer deba enfrentarse con la falta de protección de la ley⁹ y convivir con la estigmatización. Pero es, se sugiere, una situación altamente beneficiosa para el cliente que, sin verse gravado por la criminalización¹⁰, no lo está tampoco por la legalización.

Se añade, finalmente, el efecto simbólico que transmite esta legislación. La prostitución es inevitable, «el oficio más viejo del mundo», con lo cual se refuerzan los estereotipos de un hombre al que le urgen unos instintos «naturales», imposibles de contener, que puede satisfacer comprando el objeto (la mujer) necesario para aplacarlos (McIntosh, 1978:61-63).

Con esta exposición no pretendo, contrariamente a lo que pudiera pensarse, ampliar la criminalización. He procurado más bien mostrar los efectos simbólicos del derecho penal y sugerir que las críticas y subsiguientes reformas para paliar la «deficiente regulación» debieran reflexionar acerca de esta dimensión simbólica del derecho penal.

Esta difícil alianza de las mujeres con el derecho penal es abordada en el artículo de Nanette J. Davis y Karlene Faith (pp. 109-140). Si bien parten de una legislación anglosajona, su análisis, desde una perspectiva feminista, permite ponderar las dificultades de compaginar la «lógica del derecho» con la «lógica de las mujeres».

Un segundo punto que ha sido objeto de las críticas de mujeres feministas ha sido la *escasa protección* que otorga el derecho penal a la mujer. La conclusión ha sido habitualmente que el dere-

⁹ Uno de los efectos más aludidos (Fundación, 1988) es la falta de protección, que les permite ser acosadas por policías, chulos y clientes. Y cuando esta «protección» se otorga, paradójicamente resulta hacerse, en opinión de las propias afectadas, demasiado intromisiva (por ejemplo, se castiga al rufián, aun cuando la propia mujer consienta). Véase también en sentido crítico Díez Ripollés (1985) y Gimbernat (1971).

¹⁰ Así, en los países anglosajones donde la prostitución es ilegal, sectores feministas no dudan en reclamar que la ley penal se aplique también, de forma igualitaria, a quien se beneficia de ella, el cliente.

cho penal no protege de forma suficiente a la mujer al no castigar como delitos determinados comportamientos lesivos a ella.

También este aspecto se ha visto parcialmente retocado en la reforma de 1989, en la cual se ha dado respuesta a algunas de las pretensiones de las mujeres. Se han incluido como novedades el delito —antes falta— de *violencia doméstica* (art. 425), y se ha configurado un nuevo tipo penal de *impago de pensiones* (art. 487 bis).

Sin embargo, el problema, como era de prever, está siendo la ausencia de aplicación de estas normas legales. Ello ha sido ya públicamente denunciado por lo que se refiere al delito de impago de pensiones (*El País*, 11 de enero de 1993)¹¹.

La modificación legal ocurrida en 1989 debiera contribuir al escepticismo respecto al recurso al derecho penal, cuando se constata que más derecho penal no es sinónimo de una mayor aplicación y de una mayor protección. Lo paradójico es que la respuesta de algún sector feminista siga siendo «más de lo mismo».

La confirmación de que no se ha mejorado la situación de las mujeres en la práctica porque los nuevos tipos penales no se están aplicando, debiera abrir un debate más amplio acerca de la capacidad resolutoria del derecho penal. Con esta finalidad se incluye el artículo de Jolande uit Beijerse y Renée Kool (pp. 141-166).

Permítaseme repetir (Larrauri, 1991:216-231) que exigir más derecho penal conlleva numerosas contradicciones que las feministas no podemos desconocer.

Implica que estamos siendo progresistas, al exigir penas menos severas o incluso penas alternativas a la cárcel, y conservadoras, al exigir pena de cárcel, mayor duración de las condenas, eliminación de permisos, etc. No puedo compartir este tipo de «moralidad selectiva»¹².

Incluso desde una óptica pragmática, grupos feministas que

¹¹ Desgraciadamente, la (escasa) aplicación del nuevo delito de violencia doméstica es sólo una intuición que no puedo confirmar. El Instituto de Criminología de Barcelona no debió considerar el tema de suficiente entidad como para conceder una subvención para investigar el impacto de la reforma legal.

¹² Lo cual, desde luego, no es sugerir que los hombres estén libres de este cargo. Es irritante asistir a una desmedida ampliación del derecho penal en numerosos ámbitos y, cuando desde sectores feministas se reclama la introducción de un nuevo delito, se nos replique que el derecho penal es *ultima ratio*, precisamente en este caso.

han pasado por reformas similares han experimentado la necesidad de pedir penas menores por ser éstas más susceptibles de aplicación (Los, 1992:25).

La segunda paradoja es señalar que el derecho penal no se aplica y, a continuación, sin asomo de duda, pedir más derecho penal.

Estudios referidos a la violación, a los malos tratos, a los parricidios, han destacado la importancia de los estereotipos y de las convenciones sociales en la forma en cómo la ley es aplicada e inaplicada. Si ello es cierto, parece claro que no es exclusivamente un problema de que exista más y más derecho penal.

En tercer lugar, deberíamos pensar si el derecho penal, con su rudeza y simplicidad, es el mecanismo apropiado y eficaz para resolver numerosos delitos contra las mujeres.

Las conclusiones podrían extenderse a otro tipo de delitos, pero me ciño al novedoso delito de violencia doméstica, con cuya tipificación el legislador tiene la noble presunción de atajar esta lacra social.

En los estudios de violencia doméstica, tanto españoles (Haimovich, 1990; Gutiérrez, 1990) como extranjeros, se duda de la eficacia de la intervención del derecho penal. Atkins y Hoggett (1984:132) ven como causas de la ineficacia de los remedios legales las siguientes: «[...] primero porque las instituciones legales intentan fundamentalmente preservar la unidad familiar, y, segundo, por un fracaso en entender y atender la propia ambivalencia de la mujer acerca de usarlos. Y tampoco resuelven sus necesidades primordiales, que son o bien excluir al agresor del domicilio común o adquirir una nueva vivienda y protección para ella misma».

Finalmente, si recurrimos al derecho, ¿cómo debe ser este derecho? En un reciente artículo (Larrauri, 1992) mostré la preocupación de que el interés legítimo de proteger a las mujeres mediante la creación de nuevos tipos penales parecía vulnerar algunas garantías del derecho penal liberal.

Desde luego, podemos abogar por un «derecho penal de la diferencia» pero debemos ser conscientes de que el precio que se paga es seguir presentando a la mujer como un ser distinto y necesitado de un trato especial ¹³.

¹³ Obviamente nada está libre de costes: un derecho penal de la igualdad puede ser usado en detrimento de las mujeres (Mackinnon, 1987:35). Un ejemplo de ello

Mi escepticismo respecto a la aplicación del derecho penal como medio para proteger, o mejorar la situación de las mujeres, no debe interpretarse como una renuncia a participar en los debates y en los procesos de reforma legal. Los problemas de las mujeres no pueden resolverse por el simple recurso al derecho penal ¹⁴, pero hay casos en que el problema es el derecho, la forma en cómo éste trata y presenta a la mujer (Los, 1992).

Con lo cual llegamos a la cuestión crucial: ¿Cómo trata y presenta el derecho penal a la mujer? ¿Es el derecho penal un instrumento esencialmente masculino?

Quizás en ello estribe la explicación de la «impermeabilización» del derecho penal a las propuestas feministas. Cuando son acogidas son mal interpretadas, o inaplicadas, o sencillamente contrarrestadas. La constatación de que el sexismo es un fenómeno interno, consustancial, más que accidental, es una sospecha vocalizada por Mckinnon (1983:644): «El derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres».

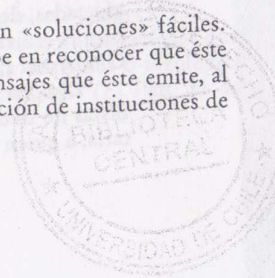
Éste es precisamente el problema que aborda el artículo de Smart (pp. 167-190). Faltan estudios en derecho penal, y en concreto en el derecho penal español, para poder contestar a esta pregunta de una forma más razonada y menos airada. Pero, a título de ejemplo, quizás pueda presentar algunas hipótesis de cómo el derecho «ve y trata» a las mujeres:

a. La forma en cómo están concebidos determinados tipos legales parece, en efecto, reflejar la opinión masculina prevalente respecto de la mujer. He indicado sumariamente cómo ello sucede en el delito de violación.

Otro ejemplo pueden proporcionarlo los, aún vigentes, delitos de aborto, infanticidio y abandono de familia *honoris causa* que

es el intento de introducir en el Proyecto de Código penal de 1992 un tipo penal que castigue el incumplimiento del régimen de visitas. Esta reforma se propone en aras de la «igualdad», ya que en la reforma del Código penal de 1989 se introdujo como delito el impago de pensiones. El efecto probable es que la igualdad redunde en una mayor criminalización de las mujeres. Es lo que Lahey (cit. por Smart, 1990:79) ha denominado «igualdad vengativa».

¹⁴ Y entonces, ¿cómo se resuelven? Dudo que existan «soluciones» fáciles. Quizás una forma de aproximarnos al derecho penal estribe en reconocer que éste cumple una función simbólica y preocuparnos de los mensajes que éste emite, al tiempo que trabajamos por encontrar remedios en la creación de instituciones de ayuda y asesoramiento a la mujer fuera del derecho penal.



prevén una atenuación de la pena a la mujer que realice este comportamiento para defender su honor.

Al margen de las dificultades con las que tropieza la aplicación de estos tipos penales atenuados ¹⁵, debemos considerar la imagen que presenta de la mujer, una mujer preocupada hasta tal punto por su honor que ello puede llevarla a abandonar, abortar o matar al recién nacido.

Con ello se oculta que la mujer que realiza estas conductas es una mujer que frecuentemente ha sido abandonada por el hombre y que carece del apoyo personal y económico de instituciones y de sus familias (De la Cuesta, 1992:46).

Aún más sibilina se oscurece que la mujer se preocupa por su honor porque la sociedad distribuye el honor y la reputación de las mujeres según su conducta sexual. Una mujer que tiene hijos fuera del matrimonio es una mujer sospechosa de promiscuidad, no es una buena mujer, y acaso ya no sea ni nombrada como mujer.

La mujer, para ser mujer, debe tener honor, debe ser honesta y honorable; en caso contrario, ya no es designada como mujer, se la nombra con otros epítetos, «fulana», «furcia», «puta», en definitiva, «una cualquiera» (pero no una mujer).

Toda su reputación social se ve afectada por este dato. No es, pues, la mujer la que está «obsesionada» por su honor sino que ella es un reflejo de la obsesión social existente de distribuir y eliminar reputaciones (e identidades) por hechos tan perentorios.

También es sintomático de la concepción de honor que reflejan dichos tipos penales, el extender la atenuación al padre de la hija pero no al padre de la criatura. «Ello es perfectamente consecuente: se protege al hombre en tanto en cuanto actúa defendiendo la esfera de su pretendido honor y no se tiene consideración alguna con el otro varón, que ha osado poner en entredicho (al deshonorar a la hija) el honor de un padre. La mujer asiste como testigo silencioso a todo este reparto de privilegios; su tragedia a nadie le interesa» (Gimbernat, 1971:81).

b. También la forma como se aplica el derecho penal puede

¹⁵ Así en el estudio de Fernández, Fernández y Orts (1988) se constata que no se aplica este tipo privilegiado cuando ya se ha «perdido» el honor, pérdida que, según los Tribunales, acontece cuando la mujer ya ha tenido un hijo de soltera. Razón por la cual se aplica el parricidio.

ser catalogada de masculina, aun cuando esté formulada en términos neutros.

Un ejemplo muy discutido en la literatura anglosajona es la posibilidad de aplicar la *legítima defensa* a las mujeres maltratadas que, tras años de palizas, matan a sus maridos.

Pareciera en un principio que no debería haber mayor obstáculo en poder aplicar la institución de la legítima defensa a estos supuestos.

Sin embargo, no es éste el caso. Exigencias como la actualidad de la agresión, que implican que el ataque debe estar produciéndose en el momento en que se ejerce la defensa, vetan la posibilidad de que la mujer cumpla este requisito, ya que normalmente su defensa no se producirá en el mismo momento, por la desproporción de fuerza, sino después del ataque y antes del próximo.

De forma análoga, el requisito de que la respuesta sea racional está plagado de dificultades. Si ello se interpreta como proporcional (al medio de ataque), se contestará que la muerte no es una respuesta proporcional a la lesión de la integridad física. La duda que surge lógicamente es si la mujer tiene alguna posibilidad de ganar utilizando una respuesta proporcional, si acaso su posibilidad de defensa no estriba precisamente en el uso de un medio de mayor intensidad para vencer la mayor fuerza del marido.

Si se argumenta que racional es una respuesta no necesariamente proporcional pero sí adecuada al hombre medio, ahí estriba precisamente el problema, ya que el «hombre medio» no es la mujer media. Y para la mujer media puede parecer totalmente racional su respuesta tras sus múltiples denuncias en comisaría, tras años de amenazas, tras la posibilidad de que el marido le quite a los hijos, etcétera ¹⁶.

c. Otro ejemplo que sí ha sido objeto de una excelente investigación en España es el caso del *parricidio* (Fernández, Fernández y Orts, 1988). En este estudio se muestra cómo la mujer que mata al marido recibe mayor pena que a la inversa y cómo la mujer que mata a su hija recién nacida recibe también más pena que el marido que mata a su mujer.

¹⁶ En Estados Unidos, ha ganado terreno aludir para exculpar estos casos al «síndrome de mujer maltratada» (Walker, cit. por Schulhofer, 1990). Con ello se consigue evitar una pena de cárcel para la mujer pero a costa de señalar que actuó de forma enajenada o bajo los efectos de un trastorno mental transitorio.

La explicación de este fenómeno de mayor severidad en las penas aplicables a las mujeres se debe en gran parte al juego de agravantes/atenuantes presentes en el Código penal que, si bien están formuladas de forma neutral, son interpretadas de acuerdo a los estereotipos distintos que rigen las conductas para los distintos géneros.

Como advierten las autoras de este estudio, la pena toma como parámetros normalmente la voluntad del autor, las consecuencias del hecho y la «injusticia» que se percibe en los móviles. Si ello es así, todos los estereotipos existentes tienden a justificar o atenuar la acción del marido; en cambio, no existe nada parecido cuando es la mujer quien mata al marido.

Las explicaciones de que no hacía las faenas (aun cuando él estuviese parado), de que era infiel (no demostrado), de que se negó a cumplir con el débito conyugal (aun cuando estuviesen separados), otorgan al marido explicaciones para justificar su acto y, lo que también es importante, permiten al juez apreciar la «racionalidad» de su acción.

Los estereotipos que rigen el comportamiento de la mujer no suministran racionalidad a sus actos. El hombre burlado tiene derecho a defender su virilidad, pero ello apenas constituye un motivo atendible para la mujer burlada; el arrebató es apreciable en el hombre; en cambio, la premeditación, o alevosía, es apreciada en la mujer.

En el supuesto de que la mujer mate a la hija recién nacida, el hecho de que fuese madre soltera, de que llevase una vida poco honesta o convencional («licenciosa»), no sirve para dotar de racionalidad a su acción, ni para apreciar sus motivos. Al contrario, se atribuyen a este acto «móviles egoístas», rechazando en consecuencia la consideración del tipo privilegiado del infanticidio, y apreciándose además las agravantes de alevosía (en atención a la edad de la víctima) o de premeditación (en atención a que había estado nueve meses embarazada).

d. Finalmente, se ha afirmado que los *valores* imperantes en el derecho penal de imparcialidad, objetividad, inquisitorialidad, son valores esencialmente masculinos.

Esta posición vino adelantada por la famosa obra de Gilligan (1982) al señalar que hay dos formas de razonamiento moral¹⁷. La

¹⁷ Ello no implica que estas dos formas de razonamiento correspondan necesariamente a hombres y mujeres. Como indicó Gilligan, «La distinta voz que yo

que acostumbra a asociarse con las mujeres es contextual, más que categórica, y relacional, más que imparcial. Lo que sorprende de esta forma de razonar es su relativismo moral, no hay absolutos, todo «depende»...

Si ello es cierto, se entiende el extrañamiento de las mujeres con la forma de operar del sistema penal, el cual, regido por unos principios jerárquicos universales, y unas reglas de procedimiento abstractas, deja poco espacio para las vicisitudes de las personas de carne y hueso.

Pero no sólo la forma de razonar para resolver los conflictos es distinta, sino además el criterio que los guía. Una forma habitual de resolver conflictos es la que Gilligan denomina «ética del derecho». Ésta enfatiza el respeto a las reglas que regulan los conflictos entre las personas, las cuales son vistas como portadoras de intereses contrapuestos. Pero Gilligan detecta «otra voz» de acuerdo a la cual los conflictos morales se resuelven guiándose por una «ética del cuidado»: la resolución del conflicto es aquella que procura no dañar a la otra persona de la cual me siento responsable.

Mejor en palabras de Gilligan (1982:164-165):

La moralidad del derecho se basa en la igualdad y en lo justo, en tanto que la ética de la responsabilidad se apoya en el concepto de equidad, en el reconocimiento de las distintas necesidades. En tanto que la ética del derecho es una manifestación de respeto igual, contrapesando los derechos de yo y los otros, la ética de la responsabilidad se basa en un entendimiento que deja lugar a la compasión y al cuidado [...]. En tanto que una ética de la justicia parte de la premisa de la igualdad —todos deberían ser tratados igual— una ética del cuidado descansa en la premisa de la no violencia —nadie debiera ser herido (Gilligan, 1982: 174).

Desde luego, las tesis de Gilligan han sido intensamente discutidas¹⁸, pero su impacto se ha dejado sentir también en la elaboración de propuestas de reforma del derecho penal.

describo se caracteriza *no por el género sino por el tema*. Su asociación con mujeres es una observación empírica porque es fundamentalmente en las voces de mujeres donde yo la he encontrado. Pero esta asociación no es absoluta, y los contrastes entre voces femeninas y masculinas las presento para alumbra una distinción entre dos formas de pensamiento y señalar un problema de interpretación, más que para presentar una generalización respecto de ninguno de los dos sexos» (1982:2). (Las cursivas son mías.)

¹⁸ El impacto del trabajo de Gilligan entre mujeres juristas se debe probablemente a su contribución a la literatura feminista, que está mostrando cómo la formulación neutral de la historia del género humano contiene un inevitable

Algunas autoras (Daly, 1989: 6-14) entienden que el derecho y el sistema penal ya operan en la actualidad con una «ética del derecho» y una «ética del cuidado». Ambas «voces» están incorporadas en los modelos penales de retribución/prevenición general y prevención especial respectivamente ¹⁹.

Heidensohn (1986: 293-296) ve posible y deseable la elaboración de un modelo dentro del sistema penal basado en una ética del cuidado. Afirma que el auge de medidas como la reparación, la mediación, la resolución de conflictos, la conciliación víctima-infractor incorporan elementos de esta ética del cuidado más que una ética del derecho.

Finalmente, Harris (1985) entiende que ello implica elaborar un modelo alternativo para tratar de los delitos y las penas. En tanto el sistema penal se caracteriza por incorporar un «modelo de guerra», es posible elaborar otro.

Este modelo alternativo partiría de que los intereses son conciliables, de que el «delincuente» es una persona si escuchamos y conocemos sus circunstancias en vez de desatender todo el contexto centrándonos exclusivamente en el «hecho»; de que debe, por descontado, responder por su hecho, pero manteniendo el *continuum* de relaciones y no castigándolo con el «exilio» (en la cárcel).

En estas respuestas, alternativas a la cárcel, lo que se realiza no es «el derecho a», sino el compromiso, la negociación y la comunicación, atendiendo a las personas concretas involucradas, a sus deseos y sus necesidades.

Probablemente sea cierto que todos estos aspectos necesitan de una mayor discusión y sean, dado el clima imperante, calificadas de utópicas. Pero en toda propuesta hay algo «utópico» en el sentido de aún no realizado, pero realizable.

sesgo masculino. En palabras de Bordo (1990:137), el mérito de Gilligan estriba en haber señalado que «[...] el lenguaje de los derechos no es el discurso ético de Dios o de la Naturaleza, sino la superestructura ideológica de una construcción particular de la masculinidad».

¹⁹ Por otro lado, Pitch (1992:365) parece afirmar que este debate es sólo una nueva formulación de las discusiones en torno a formalismo/sustantividad o trato igual/especial. Y si lo entiendo bien, aboga por mantener y conseguir precisamente la extensión de los derechos para las/los diferentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Atkins, S. y Hoggett, B. (1984), *Women and the Law*, Oxford, Basil Blackwell.
- Boix; Orts; Vives Antón (1989), *La reforma penal de 1989*, Valencia, Tirant lo Blanch.
- Brants, C. y Kok, E. (1986), «Penal Sanctions as a Feminist Strategy: A Contradiction in Terms? Pornography and Criminal Law in the Netherlands» en *International Journal of the Sociology of Law*, núm. 14.
- Bordo, S. (1990), «Feminism, Postmodernism, and Gender-scepticism», en Linda Nicholson (comp.), *Feminism / Postmodernism*, Londres, Routledge.
- VI Congreso de Mujeres Abogadas. Zaragoza, noviembre de 1992.
- Daly, K. (1989), «Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some Feminist Questions about Justice», en *International Journal of the Sociology of Law*.
- De la Cuesta, P. (1992), «La protección penal de la mujer en la familia», en *Páginas*, núm. 13.
- Díez Ripollés, J. L. (1982), *Exhibicionismo, pornografía y otras conductas sexuales provocadoras*, Barcelona, Bosch.
- (1985), *La protección de la libertad sexual*, Barcelona, Bosch.
- (1991), «Las últimas reformas en el derecho penal sexual», en *Estudios Penales y Criminológicos*, núm. XIV.
- Fernández, C.; Fernández, A., y Orts, P. (1988), *La mujer ante la Administración de Justicia. El caso del parricidio*, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, Serie Estudios, núm. 15.
- Fundación Solidaridad Democrática (1988), *La prostitución de las mujeres*, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, Serie Estudios, núm. 17.
- Gilligan, C. (1982), *In a Different Voice*, Cambridge, Harvard University Press.
- Gimbernat, E. (1971), «La mujer y el Código Penal español», en *Estudios de Derecho Penal*, Madrid, Tecnos, 1990, 3.ª ed.
- Gutiérrez, P. (1990), «Violencia doméstica. Respuesta legal e institucional», en V. Maquieira y C. Sánchez (comps.), *Violencia y sociedad patriarcal*, Madrid, Pablo Iglesias.
- Haimovich, P. (1990), «El concepto de los malos tratos. Ideología y representaciones», en V. Maquieira y C. Sánchez (comps.), *Violencia y sociedad patriarcal*, Madrid, Pablo Iglesias.
- Harris, M. (1985), «Toward a Feminist Vision of Justice», artículo presentado en la II Conferencia Internacional para la Abolición de las Cárcels. Publicado en *The Prison Journal*, núm. 67, 1987.
- Heidensohn, F. (1986), «Models of Justice: Portia or Persephone? Some

- Thoughts on Equality, Fairness and Gender in the Field of Criminal Justice», en *International Journal of the Sociology of Law*, núm. 14.
- Larrauri, E. (1991), *La herencia de la criminología crítica*, Madrid, Siglo XXI.
- (1992), «La mujer ante el derecho penal», en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, Madrid, UNED, núm. 2.
- Librería de Mujeres de Milán (1991), *No creas tener derechos*, Madrid, Horas.
- Los, M. (1992), «The Struggle to Redefine Rape in the Early 1980s», en J. Roberts y R. Mohr (comps.), *Sexual Assault in Canada*, Toronto, University of Toronto Press.
- Mackinnon, C. (1983), «Feminism, Marxism, Method and the State: Toward Feminist Jurisprudence», en *Signs*, vol. 8, núm. 4.
- (1987), *Feminism Unmodified*, Cambridge, Harvard University Press.
- Malem, J. (1992), «Pornografía y feminismo radical», en *Doxa*, núm. 12.
- McIntosh, M. (1978), «Who Needs Prostitutes?», en C. Smart y B. Smart, (comps.), *Women, Sexuality and Social Control*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Muñoz Conde, F. (coord.) (1989), *La reforma penal de 1989*, Madrid, Tecnos.
- Osborne, R. (1989), *Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad*, Barcelona, La Sal.
- Pitch, T. (1992), «A Sexual Difference Approach to the Criminal Question», en *Social and Legal Studies*, vol. 1.
- Smart, C. (1989), *Feminism and the Power of Law*, Londres, Routledge.
- (1990), «Feminist Approaches to Criminology or Postmodern Woman Meets Atavistic Man», en L. Gelsthorpe y A. Morris (comps.), *Feminist Perspectives in Criminology*, Milton Keynes, Open University Press.
- Schulhofer, S. (1990), «The Gender Question in Criminal Law», en Frankel, Miller y Paul (comps.), *Crime, Culpability and Remedy*, Oxford, Basil Blackwell.
- Tomás y Valiente, F. (1969), *El derecho penal de la monarquía absoluta*, Madrid, Tecnos.

LAS MUJERES Y EL ESTADO: MODELOS DE CONTROL SOCIAL EN TRANSFORMACIÓN

NANETTE J. DAVIS y KARLENE FAITH

I. INTRODUCCIÓN

La desviación es una construcción social, una categoría peyorativa utilizada para controlar a aquellos/as que desafían el *status quo* político. Representa un pacto socialmente construido dirigido a marginar a determinadas personas. Ataño a cualquier actividad que no sirva a los intereses de los que definen y controlan los parámetros de la convencionalidad.

A pesar de ello, las formas individualistas de disconformidad, o incluso de excentricidad, son toleradas en la medida en que permanecen en el *reducto de la individualidad*; esta tolerancia de la no-conformidad preserva el mito, propio de los sistemas democráticos, del respeto a la libertad individual. Sin embargo, cuando un determinado número de gente se identifica con una forma particular de «desviación», ese grupo se percibe como un desafío político. El proceso de creación de sanciones formales e informales para combatir la desviación se canaliza desde la base de la hegemonía política a través del derecho, las instituciones sociales, los medios de comunicación y la familia. Las desviaciones de la norma reciben respuestas que van desde el escarnio y la ridiculización hasta el tratamiento y el castigo. La etiqueta sólo se vuelve inoperante cuando los desviados adquieren poder político, en cuyo caso el grupo se redefine como una minoría política y opositora. Así pues, mientras que los desviados son percibidos como personas vulnerables e insignificantes, los oponentes políticos representan una amenaza. Actualmente las mujeres están cuestionando las asunciones que han clasificado las aspiraciones femeni-

Versión original «Women and the State: Changing Models of Social Control», en J. Lowman, R. J. Menzies y T. S. Palys (comps.) (1987), *Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control*, Aldershot, Gower. Traducción de Miriam Cugat.

nas como desviadas y que han obstaculizado su plena participación en el proceso político.

Este capítulo examina el rol histórico de las mujeres como desviadas y, más recientemente, como oponentes políticas.

II. TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL CONTROL DEL GÉNERO

Las investigaciones feministas acerca de los roles atribuidos a cada género fueron las primeras en exponer las rutinas institucionales y las prácticas cotidianas que mantenían a la mujer «en su sitio» (Davis, 1977; Stockard y Johnson, 1980; Weitz, 1977). Los estereotipos sexuales que sostienen la imagen de la mujer como un ser emocional, no muy brillante, pasivo y dependiente y concebido para la maternidad, han sido reforzados en los estudios sociológicos sobre la desviación que reflejaban los prejuicios convencionales. Una nueva generación de investigadoras han argumentado que las teorías, métodos y «modelos» del orden social, anteriormente considerados ideológicamente «puros», parten de perspectivas masculinas o bien se utilizan de un modo tal que enfatizan lo masculino, lo cual reproduce estereotipos negativos sobre la mujer (Bernard, 1981; Davis y Anderson, 1982; Schur, 1984).

Al referirse a la sociología de la desviación, las feministas han objetado que estas creencias y prácticas distorsionan y desvaloran las experiencias de las mujeres, por lo que abogan por la utilización del concepto de *género* para el análisis de la desigualdad. Schur define el género como: «un sistema normativo y una extensa red de normas y sanciones interrelacionadas a través de las cuales el comportamiento femenino [y masculino] es evaluado y controlado» (1984, p. 11). Esta perspectiva nos permite concentrar nuestra atención en la manera como los estudios sociológicos contribuyen a mantener las creencias dominantes en la definición de la desviación (Davis y Anderson, 1982; Klein, 1973; Millman, 1975; Schur, 1984; Smart, 1977).

1. Cuando los sociólogos explican el fenómeno de la desviación femenina, normalmente hacen uso de los estereotipos sobre roles de género, los cuales se basan en mitos sobre las diferencias

sexuales biológicas y las cualidades psicológicas «innatas» de las mujeres. Por lo general, la imagen que dan de las mujeres es la de personas totalmente gobernadas por su sexualidad, los roles familiares o sus relaciones con los hombres. Estas asunciones se basan en argumentos de carácter filosófico y teológico que subrayan la desigualdad «natural» de los sexos (Bernard, 1981; Coward, 1983).

2. La interpretación más común de la desviación femenina en este modelo es la «inadaptación» o «patología» (Schur, 1984). La desviación femenina raramente se evalúa positivamente, es decir, como una sublevarción activa, una simple renuencia a obedecer, una forma de manejar los problemas o como una terapia (Chesler, 1972).

3. Una alternativa al argumento de la «patología» consiste en la atribución de «funciones» positivas a la desviación femenina, la cual se dice que mantiene el orden social. Por ejemplo, Kingsley Davis (1937) creía que las prostitutas servían «al ejército de extraños y pervertidos», los cuales, de lo contrario, hubieran arrollado el orden convencional. Sin embargo, se tenía poca consideración por la dimensión de explotación implícita en esta solución o por la inhibición institucional de proteger a las prostitutas, en la medida en que era básicamente «funcional» para los hombres.

4. Los estudios sobre la desviación, al haber centrado su atención en los delincuentes, han olvidado a sus víctimas. Las mujeres que han sufrido violencia física, degradación, tratamiento injusto y discriminación legal y económica a causa del poder masculino, se convierten en víctimas «que se lo merecen» (Ryan, 1972). Las mujeres, por el hecho de ser «desviadas a todos los efectos» (Schur, 1984, p. 7), también han sido acusadas de la violencia masculina. A lo largo de la historia, las mujeres han sido objeto de «cuidados» paternos: engatusadas y amenazadas, han soportado la carga de asumir el rol de «chivo expiatorio» (Dinnerstein, 1977).

5. La etiqueta «desviación» es demasiado estrecha y estigmatizadora para acoger todas las formas normalizadas de control social que se dan en el comportamiento interpersonal y en las interacciones cotidianas que subordinan y devalúan a la mujer. Es necesaria, en cambio, una macroconcepción —que incluya el rol del Estado— para comprender el lugar que ocupa la mujer en la historia y en el orden social. En este sentido, la crítica a la historia de

Boulding (1976) señala que las mujeres, excluidas de la vida pública a la fuerza, se han mantenido en los márgenes inferiores de la vida (casa, familia, convento) donde sus experiencias han permanecido invisibles en las interpretaciones masculinas del mundo.

6. El contexto sociocultural de la desviación se ha presumido y no se ha constituido en objeto de investigación. Los tipos de desviación, las motivaciones para la desviación y las adaptaciones al control ocurren en un contexto histórico. Al mismo tiempo, algunas formas de desviación presentan una continuidad con formas de respuesta al control. Tanto el infanticidio durante la Edad Media como el aborto en la actualidad ocurren en situaciones donde las mujeres reciben un escaso reconocimiento y soporte material para adoptar un rol central en la vida (Oakley, 1976).

7. Las sanciones por la desviación femenina han sido calificadas como «indulgentes» o producto del principio de «caballerosidad». Esta concepción no toma en consideración los mecanismos reales de coerción que caracterizan el proceso de la socialización femenina y su adaptación al rol del género. Daly (1978) argumenta que la existencia del rol femenino se vincula invariablemente al ejercicio de la violencia, desde la lapidación de la mujer (no del hombre) adúltera en la Biblia, el *suttee* (incineración de la viuda) en la India, la práctica de atar los pies en la antigua China, las cazas de brujas en la Europa medieval y la América colonial, las mutilaciones genitales bajo la apariencia de «tratamiento» médico en el siglo XIX, hasta la pornografía y violencia física arbitraria tan prevalentes en la sociedad contemporánea.

III. MUJER Y CONTROL SOCIAL

A lo largo del presente siglo se han producido transformaciones significativas en las formas de control social. Entre éstas cabe mencionar el paso de la respuesta institucional dual (o sea, dividida entre el ámbito doméstico y las instituciones totales propias del siglo XIX) a la «transinstitucionalización» característica del siglo XX (Steadman y Morrissey, 1987). El Estado lleva a cabo el mencionado control, involucrándose en el conjunto de estructuras institucionales, que incluyen a la familia, la economía, el derecho, la educación, la terapia, el sistema de justicia penal, las redes de

asistencia social, los servicios médicos, etcétera. A través del control fiscal y el poder policial, el Estado tiene la capacidad de trasladar a los individuos de una institución del control social a otra. Determinados grupos de mujeres son mucho más susceptibles de ser encarceladas que los hombres que se encuentran en situaciones análogas. Las adolescentes desobedientes o que se fugan de su casa, las que son sexualmente activas o se han quedado embarazadas en contra de los deseos del marido o del padre, y las madres «inadecuadas» son más vulnerables a la intervención estatal que los hombres desobedientes, o que se han fugado de casa, o sexualmente promiscuos, o que agreden de algún modo a los miembros de su familia (Roth y Lerner, 1982).

Dado que las mujeres normalmente no son ni absolutamente tradicionales (o sea dependientes) ni modernas (o sea autónomas y económicamente independientes), las formas de control contemporáneas suelen ser erráticas y arbitrarias (véase Travis y Wade, 1984). Por ejemplo, el mismo sistema puede contemporáneamente reaccionar, por un lado, con indulgencia ante un delito relativamente grave, y, por otro, castigar a la mujer por infracciones relativamente triviales (Chesney-Lind, 1977; Edwards, 1984). Las mujeres continúan siendo penalizadas por la violación de los roles sexuales tradicionales; sin embargo, los medios disponibles tienden a ser más variados, menos visibles, y más difusos que en períodos anteriores (en los que, por ejemplo, era normal ejecutar por delitos que actualmente se consideran faltas).

El presente siglo ha sido testigo del paso de la confianza absoluta en las instituciones totales al incremento de estructuras descentralizadas y de base comunitaria (Davis y Anderson, 1983). Entre éstas se cuentan los servicios de asistencia social, servicios de salud mental de base comunitaria, programas de distribución de alimentos, seguridad social, asistencia sanitaria, así como otros programas de carácter social financiados por el gobierno. A pesar de los obstáculos burocráticos que excluyen muchos sujetos necesitados, existe una cantidad desproporcionada de mujeres que perciben este tipo de prestaciones que dependen del nivel económico del sujeto solicitante. En 1977, la aplastante mayoría de familias monoparentales en los Estados Unidos¹ era encabezada por muje-

¹ Todos los datos demográficos que aparecen en el presente artículo se refieren a EE UU.

res, dos tercios de las cuales dependían de los servicios de asistencia social. Las mujeres representaban el 60% de los receptores de la asistencia pública en cada una de las fases de su vida (Danzinger, Haveman y Plotnick, 1980).

Un factor significativo en el cambio de estrategias de control ha sido el cambio de las ideologías del control. Las instituciones totales fueron atacadas durante la década de los sesenta y principios de los setenta porque violaban la libertad de las personas, su integridad y derechos humanos (Beck, 1977; Davis, 1980). Se alzaron voces críticas desde dentro y fuera del sistema instando la desinstitucionalización —el retorno de las personas desviadas a la comunidad (Davis, 1980; Schur, 1973; Szasz, 1970). En la comunidad, el alcance del control puede ser mucho más amplio. Puede ser también menos visible y más eficaz.

IV. DESCENTRALIZACIÓN Y MECANISMOS DE CONTROL

Las feministas y los radicales han liderado el ataque más reciente al excesivo alcance del Estado corporativo, el cual mantiene un sistema de control bifurcado por los criterios de clase y raza. Señalan la existencia de dos niveles en el sistema, en el seno del cual las mujeres de clase media y alta reciben los servicios descentralizados y privados (en los que existe alguna opción basada en la capacidad adquisitiva), mientras que las mujeres pobres y tercermundistas sufren formas de control de carácter centralizado y represivo, como la asistencia social, tratamientos mentales coercitivos y encarcelamiento (Hutter y Williams, 1981). Otras indican que las mujeres han sido especialmente objeto de abuso por algunos psiquiatras que han interpretado los «problemas de la vida» como indicadores exhaustivos que justificaban una intervención plena de carácter psiquiátrico (véase Chesler, 1972; Smith y David, 1975).

Las contradicciones en el control no son un fenómeno reciente, más bien ha sido exacerbado por la vida urbana moderna. En la medida en que los problemas relacionados con la mujer y con la familia, continúan incrementando y/o llegan a la atención pública (por ejemplo, el divorcio, el maltrato de niños, las agresiones a la mujer, los suicidios de adolescentes y la paternidad/mater-

nidad solitaria) las mujeres son acusadas frecuentemente de ser la «causa» de esta enfermedad social (Davis y Keith, 1984). Aún más, el Estado ha sido relativamente poco eficaz en la prevención de los delitos violentos contra la mujer, y en la disminución del sufrimiento posterior a la victimización. La violación, la violencia doméstica, los crímenes callejeros contra las prostitutas y las mujeres pobres y otras agresiones físicas a las mujeres, son a menudo ignorados por los agentes públicos —lo cual se percibe como natural— o son tratadas de manera ineficaz y a menudo inapropiada (véase Dobash y Dobash, 1979, 1981). En los juicios por violación la víctima puede convertirse en acusada, ya que su historia sexual y su estilo de vida se convierten en el objeto del proceso (Clark y Lewis, 1977). Un reciente caso, el cual ha sido objeto de gran publicidad, en el que una mujer testificaba que cuando era adolescente había acusado falsamente a un hombre por violación, una vez éste ya había cumplido parte de la condena, ha contribuido a reforzar los prejuicios existentes acerca de la credibilidad del testimonio de la mujer (véase Brozan, 1985).

El Estado, al adoptar una actitud dura contra las mujeres calificadas como desviadas, al usar la prisión para delitos relativamente insignificantes y al denegar la asistencia social y otros beneficios estatales a las mujeres, crea un sector permanente de mujeres dependientes (Carlen, 1983). La intervención burocrática ha conseguido aislar a las mujeres en función de sus necesidades, y ha precipitado la pérdida de privilegios específicos por razón del género. La «madre» y la «señora» podían ser roles ventajosos para las mujeres del siglo XIX, pero bajo el control burocrático no existen mecanismos protectores análogos para la mujer anónima moderna.

En resumen, en la actualidad, la descentralización del control social ha ampliado la red de control sobre las mujeres. El Estado ahora usa una red de sistemas institucionales para el mantenimiento del orden social, incluyendo la ideología (por ejemplo, la mística de la feminidad), la familia, la educación, la asistencia social, el sistema penal, la asistencia psiquiátrica, la sanidad, el empleo y el mercado (por ejemplo, el consumismo). Al mismo tiempo, el estatus social de millones de mujeres y de sus respectivos hijos ha descendido (Hartmann, 1976).

V. LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

El censo de EE UU de 1980 muestra que los ingresos de las mujeres son comparativamente desfavorables respecto de los hombres, independientemente de su estado civil, edad, raza u ocupación. Las mujeres más desfavorecidas desde el punto de vista de los ingresos son las casadas, las de mediana edad, las de raza negra y las vendedoras (sector en el que ganan menos de la mitad de lo que ganan los hombres con un empleo similar [Belle, 1982]). Si tenemos en cuenta todas las categorías de trabajadores, los ingresos anuales de las mujeres son un 40% inferior a los de los hombres. Las mujeres con un título universitario ganan menos que los hombres que han finalizado el COU y más o menos tanto como los hombres que no finalizan sus estudios de nivel medio. Una mujer con un título de doctor gana tanto como un hombre con estudios de enseñanza media (Barrett, 1979).

En 1980 las mujeres de raza negra continuaron sufriendo la mayor desigualdad de salarios, ganando una media de unos 8 258 dólares anuales menos que los hombres blancos; pero las mujeres negras estaban sólo ligeramente por debajo de las mujeres blancas con una diferencia de 788 dólares al año (Hacker, 1983, p. 146). La desigualdad de salarios es un factor que traspasa todos los ámbitos de la vida de la mujer.

Los salarios de las mujeres, en comparación con los de los hombres, han disminuido en los últimos años, y más de la mitad de las ocupaciones que normalmente desempeñan las mujeres no proporcionan un nivel de ingresos suficiente para mantener a la familia por encima del nivel de pobreza (Fox y Hesse-Biber, 1984). Kahn-Hut, Daniels y Colvard (1982) identifican los obstáculos estructurales que impiden el acceso laboral de la mujer. La lógica de la jerarquía laboral no permite tratar más equitativamente a la mujer dado que la igualdad reduce las ganancias, eleva el coste de los servicios públicos y altera las relaciones habituales entre hombres y mujeres, y entre los directores y subordinados. La falta de estructuras de soporte para el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico (o su escasez y carácter inalcanzable) implica que la mayoría de las mujeres se enfrentan con problemas casi insuperables en su lucha por la igualdad laboral. Y el acoso sexual, un problema habitual para las mujeres trabajadoras, es una de las

formas más patentes de discriminación sexual sistemática que disuade a muchas mujeres en su intento de conseguir una mejora en el mercado de trabajo.

Debido al aumento de separaciones matrimoniales y divorcios, particularmente entre las familias con hijos dependientes, muchas mujeres han sido arrastradas a la pobreza (Ross y Sawhill, 1975). Y dado que pocas familias reciben ayudas económicas del padre que no tiene la custodia de los hijos, durante los años que siguen al divorcio, las mujeres se ven obligadas a solicitar los servicios de la asistencia social para poder mantener a sus familias. Hoy en día hay más de cuatro millones de familias y diez millones de niños que viven en la pobreza en EE UU, y un 65 % de estas familias pobres están encabezadas por mujeres.

El recurso a la asistencia social combinado con el menor nivel de ingresos de las mujeres y la limitada aceptación social de las madres solteras, son factores que reducen la autonomía de la mujer respecto a la familia y limitan sus posibilidades de elección sobre su propia vida. Una política social que mantiene a la mujer en una situación de dependencia económica tiene consecuencias que van más allá del bajo nivel de los salarios. En una sociedad en la que el estatus de adulto está tan intrínsecamente unido a la posesión de un trabajo remunerado, cualquier trabajo es mejor que la desocupación, incluso si los bajos salarios degradan a los trabajadores y los hacen más sumisos. Para las mujeres ello tiene la consecuencia adicional de reforzar el *status quo*, independientemente de los daños propios del sexismo. Las relaciones patriarcales sobreviven, no sólo porque las leyes tradicionales y las costumbres imponen la inferioridad de la mujer, sino también porque la dependencia económica en las sociedades capitalistas juega un papel crucial limitando las oportunidades sociales, educativas y políticas (Turner y Starnes, 1976).

VI. LA SUPERVIVENCIA DE LAS RELACIONES PATRIARCALES EN EL SIGLO XX: LA PORNOGRAFÍA, LA VIOLACIÓN, LA SEXUALIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA FEMENINA Y LA PROSTITUCIÓN

En esta sección nos ocupamos de las relaciones patriarcales que sirven de base para definir la identidad de la mujer «desviada» por

medio de formas sexualmente degradantes y dependientes: la pornografía, la violación, la sexualización de la delincuencia femenina y la prostitución.

VI.1. *La pornografía*

La pornografía no ha sido reconocida siempre como un peligro para las vidas y la salud mental de las mujeres. En el siglo XVIII, un noble francés, el marqués de Sade, creó un nuevo género de ficción que caracterizaba a los hombres como máquinas sexuales inexorables y a las mujeres como sus instrumentos pasivos (Seaver y Wainhouse, 1966). Sade escribió durante la primera ola de la industrialización, la cual despertó un vivo interés cultural por las máquinas. En esta literatura, los hombres aparecen como máquinas sexuales capaces de realizar proezas extremas y anormales con sus víctimas femeninas a las que tratan como esclavas. La esclavitud femenina, la degeneración, la mutilación y la muerte eran temas frecuentes. A pesar de que tanto la Iglesia como el Estado se sintieron ultrajados por esta literatura sadomasoquista, pervivió durante doscientos años a través de la versión popularizada de los horrores sexuales de Sade, y ha continuado castigando, humillando y aterrorizando a las mujeres por medio de la comunicación lingüística y visual (Griffin, 1981, p. 85).

Las críticas feministas iniciaron su ataque a la pornografía con el lema de «recupera la noche» (Lederer, 1980). Argumentaban que el *qué* de la pornografía no era el sexo sino el poder y la violencia, el *quién* implicado no eran los escritores, artistas, sino las mujeres. Las teóricas feministas subrayan que la pornografía constituye un modo de reafirmación del control masculino, dirigida especialmente a los hombres (de cualquier nivel social) que no tienen el control de sus vidas en el sistema capitalista (Diamond, 1980, pp. 686-701).

Uno de los temas controvertidos del debate acerca de la pornografía es si, además de ser una forma de violencia masculina sobre la mujer, es también un catalizador de las agresiones a las mujeres (Donnerstein, 1980; Schur, 1984; Snitow, Stansell y Thompson, 1983). La conclusión general de las teóricas feministas es que el incremento de la violencia misógina en los medios de comunicación refuerza la aceptabilidad de la violencia contra las

mujeres. Las películas *snuff*, de las que sus promotores garantizan la veracidad de las muertes de las mujeres que aparecen en pantalla, constituyen simplemente la manifestación más radical de este sentimiento adverso a la mujer. La misoginia en los medios de comunicación produce ganancias a la economía capitalista. La oferta y la demanda se recompensan mutuamente.

VI.2. *Las políticas acerca de la violación*

La violación es una forma común de violencia masculina y no tiene fronteras de clase o edad. Se han denunciado violaciones tanto de niñas menores de seis meses como de octogenarias. Poco a poco van surgiendo investigaciones que describen la violación más como el producto extremo de una estructura social «normal», que como consecuencia de una personalidad «anormal» de los violadores (Mahoney, 1983, p. 428) o del carácter «desviado» de las víctimas. Holmstrom y Burgess (1983) argumentan que la violación es un aspecto de la agresividad y coerción existente en las relaciones entre el hombre y la mujer. Erving Goffman (1978) ha denominado a la violación «un modelo de contaminación interpersonal en nuestra sociedad». Y Gibbons (1984) afirma que la violación probablemente se pueda entender mejor como el extremo de un comportamiento continuo que como un tipo de actividad aberrante o desviada.

Las actitudes generales que tienden a enfatizar el poder y la dominación del hombre sobre la mujer proporcionan la base ideológica y socioestructural de la violación y de la costumbre de «acusar a la víctima» que caracteriza este delito. La violación es una conducta estandarizada a menudo planeada y reiterativa. Estas características confirman su origen social y contradicen la visión tradicional de la violación como un impulso biológico irreprimible.

La violación por parte de un extraño se produce en aproximadamente la mitad de los casos denunciados (McDermott, 1979) y constituyen los casos más aptos para captar la atención de los medios de comunicación y de la policía (Rabkin, 1979). Los espacios públicos —como calles, parques, áreas de juego— son los lugares más comunes para la comisión de este tipo de violación y representan el 47% de los casos denunciados, seguidos de los que ocu-

rran en el domicilio de la víctima (un 18%). Las armas se usan en aproximadamente el 40% de los casos, en la mayoría de los cuales se utilizan cuchillos y pistolas. La presencia de una pistola incrementa la probabilidad de que la violación intentada sea consumada (McDermott, 1979).

En un estudio sobre los violadores encarcelados en las prisiones de Virginia, Scully y Marolla (1984) elaboraron la lista de motivos o los estereotipos culturales comunes que los violadores usan para justificar la violación ²:

1. *La mujer seductora.* Además de los estereotipos culturales comunes, la psiquiatría y la criminología han ofrecido tradicionalmente justificaciones para la violación, al dar la imagen de una mujer víctima de su propia actitud seductora. En los relatos sobre violación, la mujer aparece como la agresora, una seductora que atrae al hombre inocente y confiado a la relación sexual. Se dice que las víctimas habían dado el primer paso, o habían aceptado a cambio de dinero, drogas, o que se las habían «ligado», y por tanto era juego limpio.

2. *Las mujeres dicen que «no» cuando quieren decir que «sí».* Los violadores describen frecuentemente a sus víctimas diciendo que inicialmente se resistían, pero se defienden alegando que creían que ellas en el fondo lo aprobaban. La resistencia se considera parte del «juego» en el que interviene un factor de semilucha que el hombre cree que tiene que vencer. Negar la violación, la víctima y las circunstancias del hecho es una actitud común en los condenados por violación. También puede suceder que el hombre conciba aquel acto como una prerrogativa que como hombre tenía derecho a realizar en aquella situación. Desde este punto de vista, se considera que si la víctima sobrevivió sin un daño físico demasiado grave, no se puede hablar de violación.

3. *La mayoría de las mujeres en realidad se relajan y disfrutan.* Los violadores arguyen frente al Tribunal y los investigadores que no sólo la víctima deseaba aquella conducta sino que además disfrutó. Uno de los condenados por violación dijo: «por lo que

² Estas listas de motivos se presentan como tipificaciones ideales más que en términos cuantitativos.

vi, disfrutaba». Aquellos que niegan la violación suelen ser los más convencidos de sus habilidades sexuales y atractivo personal. En cambio, los hombres que reconocen haber violado utilizan términos como «sucio», «humillado» y «disgustado» para describir cómo pensaban que la violación hizo sentirse a las mujeres (los cuales constituyen sentimientos coherentes con el deseo del violador de degradar a las mujeres).

4. *Las buenas chicas no son violadas.* La reputación de la víctima, así como sus características o un comportamiento no acorde con las expectativas normativas de los roles sexuales, se considera que contribuyen a causar el delito. El estereotipo de que las «buenas chicas no son violadas» sirve para demostrar que la víctima no tenía honra: como en el caso de la prostituta, la mujer «perdida», la promiscua, la divorciada, la que tiene hijos extramatrimoniales, la que hacía auto-stop. Se dice que estas situaciones crean víctimas «legítimas». Un condenado, hablando de su víctima, dijo que «era capaz de darte drogas o un trozo de culo fácil». Otro manifestó que «en el tribunal ella declaró que era virgen, pero pude comprobar durante la violación que era muy experimentada». Las excusas y justificaciones giraban también en torno a lo que la mujer llevaba (como una minifalda), su apariencia física, su ocupación (por ejemplo, a una camarera se le imputó tener una «baja» moral) y en torno a la queja de haber sido erróneamente acusados por «malas putas». Desacreditar y acusar a la víctima a la vez que excusarse alegando la mala reputación de la víctima, transmite el mensaje de que la víctima obtuvo lo que se merecía.

5. *Sólo es una falta leve.* Muchos de los condenados por violación en el proceso habían admitido la comisión de un delito leve. Admitían ser personas supersexuadas y con poca capacidad de juicio o de malicia, ser culpables de adulterio y/o violencia, o contribuir a la delincuencia de un menor, pero refutaban tajantemente la definición del acto como una violación. Scully y Marolla (1984, p. 537) explican el caso de un violador el cual cuando la víctima se resistía a su agresión la golpeó y dijo:

Hice algo estúpido. Le clavé una navaja y la golpeé tan fuerte como si golpeará a un hombre. Pero no debería estar en prisión por lo que hice. No tendría que cumplir todo este tiempo por ir a la cama con una fulana.

Entre estos condenados, prevalecía la «normalidad». Rechazaban la desviación, alegando el abuso de alcohol y drogas, el padecimiento de problemas emocionales (como sentirse deprimidos) y ofrecían la imagen del «buen chico». Scully y Marolla³ concluyen que «cuando el sexo es visto como un derecho masculino, la violación no se concibe como delito».

VI.3. *Perspectivas feministas acerca de la violación*

Desde una perspectiva feminista, la violación no se puede considerar ni como una forma de sexualidad «alternativa» ni como un crimen «sin víctima». Las mujeres no desean ni buscan la violación, al contrario, son asaltadas «en contra de su voluntad».

El ataque de Brownmiller (1975) a la ideología de la violación en la sociedad occidental se centra en tres puntos principales:

1. La violación es una invención exclusivamente masculina (y no un delito provocado por la mujer), que refleja la situación de desigualdad y al propio tiempo impide las relaciones de igualdad entre los sexos. Las corrientes ocultas de las relaciones entre hombres y mujeres, en última instancia están basadas en el poder del hombre y en la coerción. A su vez éstas descansan en la imagen de la mujer como propiedad del hombre.

2. La dominación masculina es una estrategia diseñada por los hombres y dirigida a los hombres. Donde ello se expresa con mayor dramatismo es en las situaciones de guerra, en las cuales la violación de las mujeres de la nación derrotada es un símbolo del poder absoluto de los vencedores sobre los vencidos. Para las mujeres de la nación derrotada, la indignidad última se sellará con la estigmatización que produce la violación, que las convertirá en objeto de rechazo de los vencedores y de su propio marido y grupo familiar.

³ Una interpretación alternativa (comunicación personal de Lowman) es que los hombres sí perciben la violación como una conducta social inaceptable dadas las expectativas sociales sobre la atracción del hombre y su conducta sexual; se espera que los hombres tengan «éxito» cuando se proponen atraer a las mujeres sin que tengan que hacer uso de la fuerza (o sin que tengan que comprar servicios sexuales, un signo obvio del «fracaso» del macho). Ello no convierte la negación del violador de su acto en más aceptable, pero indica que describir cuáles son las expectativas acerca del comportamiento sexual es una tarea delicada.

3. La violación no es un acto sexual, sino un delito violento que, al igual que los linchamientos de los negros posteriores a su emancipación, mantiene una relación de desigualdad a través de la sola amenaza. No es necesario que todos los hombres violen para el mantenimiento del control masculino. En el contexto social de las relaciones de poder, la sola amenaza permanente de una eventual violación es percibida como un «proceso de intimidación a través del cual todos los hombres mantienen a las mujeres en un estado de miedo» (Brownmiller, 1975, p. 5; véase también Schur, 1984).

Sanday (1981, pp. 5-27) ha examinado 156 sociedades tribales, algunas de las cuales mostraban un alto nivel de violaciones, mientras que otras se caracterizaban por presentar ninguna o pocas violaciones. El trabajo concluía que «la violencia es parte de una configuración cultural que incluye violencia interpersonal, dominación masculina y separación sexual». ¿Qué condiciones permiten el énfasis cultural existente de la dominación masculina y de la separación sexual? Sanday afirma que tales características culturales generalmente emergen en sociedades que se enfrentan con situaciones de escasez de recursos alimenticios, migración y otros factores que promueven la dependencia en las capacidades destructivas de los hombres en contraposición a una situación de igualdad entre los géneros. Sanday especula por lo que respecta a la sociedad americana que los hombres que no poseen el control sobre su propio destino son los más proclives a la comisión del delito de violación (véase Bart, 1985).

Desde una perspectiva marxista, Schwendinger y Schwendinger (1981) subrayan el papel que desempeña el capitalismo en la modelación de la personalidad y la violencia:

Las condiciones capitalistas producen un desarrollo de la personalidad que vincula la masculinidad con la violencia y la feminidad con la no violencia. Por ejemplo, el hecho de asignar a las mujeres un lugar en la familia dentro del sistema de producción social tiene consecuencias en la formación del carácter. En estas condiciones es común que las mujeres tengan experiencias durante la infancia que restringen de modo importante su participación en conductas violentas y en muchas de otro tipo. Actúan de un modo mucho menos violento que los hombres, cuya estructura de la personalidad está más vinculada a las exigencias del modo de producción capitalista y a las normas instrumentales de su mercado

competitivo. Aún más, los hombres conservan el monopolio de las armas y del entrenamiento para la guerra [1981, p. 17].

Desde esta perspectiva, las condiciones capitalistas promueven la característica desigualdad de los sexos que contribuye al ejercicio de la violencia sobre las mujeres por parte tanto de extraños como de los familiares.

La visión masculina de la mujer como propiedad privada refleja creencias tradicionales sobre la privacidad (la vida de la persona es un asunto en el cual no se admiten las interferencias ajenas) y la propiedad (el valor individual se mide por lo que uno posee, incluyendo las mujeres, y la manera como uno lo protege). La doctrina de la privacidad que caracteriza el sistema de derecho (occidental): «[...] conserva, protege, refuerza, emmascara, esconde, distorsiona y refleja el abuso sexual de la mujer. Su función principal —el control de la sexualidad femenina, de esferas de interacción íntimas y sensibles— ha pasado desapercibida» (Colker, 1983, p. 199).

Cuando los hombres ejercitan el poder en la esfera privada están ejerciendo un poder que el poder público les delega de hecho. La idea de que la mitad de la población se encargará de (y controlará a) la otra mitad, es una visión romántica de la seguridad doméstica (Burton, 1985). La doctrina de la privacidad cuando se promulga por ley conlleva prácticamente el rol subordinado de la mujer y la victimización en la «privacidad del hogar».

Stang Dahl y Snare (1978, p. 22) señalan el fracaso del Estado en su intento de controlar la violencia doméstica:

[...] el tipo de control primario que afecta a las mujeres en el sector privado tiene un carácter particularmente coercitivo. Además de la vigilancia intensiva en la cual las mujeres viven, está la concepción jurídica del carácter sagrado de la vida privada y de la no intervención de agencias sociales en situaciones de violencia y conflictividad doméstica. Adicionalmente el sentimiento de impotencia de las mujeres se refuerza ideológicamente por los contenidos de las disciplinas académicas que continúan basándose en el modelo de consenso para definir el contrato matrimonial y la institución familiar [1978, p. 22].

Además de la desigualdad por razón del género, podemos apreciar otros factores que mantienen la situación de vulnerabilidad de la mujer ante la violencia. Incluso en ciudades en que se ha

progresado en la equiparación del salario medio, de la educación, del prestigio del empleo, el índice de violaciones no ha disminuido y en algunos casos de hecho se incrementaron, en parte debido, se especula, a un incremento de las denuncias (Ellis, Atkeson y Calhoun). En un contexto más amplio de separación de los distintos géneros, donde la mayoría de las mujeres continúan trabajando por sueldos bajos, en posiciones de baja categoría y donde existe de hecho un monopolio masculino de los recursos sociales y del control, la violación continuará expresando y simbolizando la separación de los géneros. Allí donde se ha producido un progreso perceptible para las mujeres, los hombres pueden sentirse más amenazados (Russell, 1975). Según Schur «la reacción [hostil] anti-feminista podría producir —o de hecho produce— a corto plazo incrementos del número de violaciones» (1984, p. 156).

Los recientes esfuerzos para aplicar penas más severas como la castración quirúrgica o los tratamientos hormonales, con el convencimiento de que la mutilación de los criminales corregirá el problema de la violación, reflejan un pensamiento *naïf*. Es obvio que la violación y la tolerancia de la violación no disminuirá de manera significativa si no se producen mayores transformaciones en las normas y relaciones entre los géneros. Schur nos advierte que estas reformas distorsionan el problema subyacente: la necesidad de cambios radicales respecto de los roles asignados a cada género.

Dada la estrecha vinculación a los roles socialmente aprobados, sólo una alteración básica de éstos puede «solucionar» el problema de la violación. Y hasta que las mujeres no sean más valoradas de modo que sus derechos sean considerados dignos de ser defendidos, la negación implícita de la gravedad del problema persistirá [1984, p. 156].

VI.4. La sexualización de la delincuencia femenina

La expresión «niña rebelde» —refiriéndose a las chicas jóvenes involucradas en «status offences»⁴ como faltas de asistencia no jus-

⁴ En la mayor parte de Canadá, no existe un gran número de jóvenes juzgadas por *status offences* (véase Hatch y Faith, 1985). La ley de los delincuentes juveniles, vigente desde abril de 1984, ordena que las jóvenes no sean tratadas de manera

tificadas, incorregibilidad y mala conducta sexual— suena anticuada. Aún así, la categoría de «rebelde» ha sido la principal fuente de reclutamiento de chicas en el sistema penal. De hecho, hasta la década de los sesenta en EE UU se llegó a inculpar a las chicas en un 88, 5% de la cifra total de delitos por este tipo de conducta, mientras que sólo un 22% de los chicos lo fueron (Datesman y Scarpitti, 1980, p. 40). Oficialmente, las chicas delincuentes fueron etiquetadas por este motivo y encarceladas por conductas que si hubieran sido cometidas por un adulto no hubieran sido criminalizadas.

La «sexualización» de la delincuencia femenina implica que los tribunales castigan a las mujeres que mantienen una sexualidad socialmente «inadecuada», mientras que los hombres reciben penas proporcionales a la mayor gravedad de los delitos. La frase del sistema de justicia juvenil «por su bien» es utilizada para justificar la mayor rigidez del control de las chicas jóvenes respecto a la de sus coetáneos masculinos. Los actos de fuga, incorregibilidad, promiscuidad y prostitución son considerados «ofensas morales» que requieren la «protección» de los tribunales (Chesney-Lind, 1977).

Según Steffensmeier (1980) existen tres factores que explican el incremento de detenciones de mujeres durante la pasada década. El primer factor consiste en la mayor tendencia a procesar por delitos de hurto en los almacenes y por estafa. El segundo se basa en la mayor voluntad de los ciudadanos de denunciar delitos cometidos por mujeres. Y, finalmente, la nueva política del sistema penal, que promueve más detenciones, procesos y condenas de mujeres, lo cual ha alterado los índices de criminalidad. Globalmente, las mujeres continúan representando menos del 15% de las personas detenidas y siguen existiendo las diferencias entre hombres y mujeres por lo que se refiere a la comisión de delitos violentos y de cuello blanco (Steffensmeier, 1980, p. 1080-1108). Por el contrario, las actuales investigaciones sobre los roles sexuales destacan que a pesar del incremento de la flexibilidad del rol de la mujer y de los cambios legales que se han producido, se mantienen los ro-

diferente por el sistema penal. En líneas generales, el nivel de presos/as jóvenes y adultos es más bajo en Canadá que en EE UU. En 1985 había aproximadamente 250 mujeres en Canadá cumpliendo condenas de dos o más años, mientras que en el Estado de California, que tiene una población equivalente a Canadá, había unas 1 500 mujeres cumpliendo condenas de unos dos o más años.

les tradicionales de la mujer como esposa-madre y como objeto sexual (Blake, 1974, pp. 137-147; Steffensmeier, 1980, p. 1099; Weitz, 1977). Esta tesis se puede ilustrar claramente en las investigaciones sobre la prostitución.

VI.5. *Prostitutas: delincuentes simbólicas*

Actualmente se considera que la prostitución es un «caso extremo de estratificación sexual» (Heyl, 1979), en el cual la «comercialización» de la sexualidad femenina contribuye a la degradación y objetivización de la mujer. La propiedad y el intercambio de la sexualidad femenina funcionan como elemento central de todo nuestro sistema sexual (Collins, 1971; Laws, 1979; Lévi-Strauss, 1949). Las prostitutas como «propiedad pública» actúan como contrapunto para delimitar la categoría opuesta de mujeres, la propiedad sexual de las cuales es de carácter «exclusivo».

Las mujeres que se inician en la prostitución, no son las únicas que se autoperciben como un objeto de comercio y sus cuerpos como «mercancías» objeto de compra-venta (James y otros, 1975, p. 43). Como observa Laws, «las normas para las mujeres en los tribunales perfilan la imagen de la mujer como objeto de comercio. Su poder de atracción constituye su capital, el cual puede invertir prudentemente para asegurar un ingreso futuro adecuado» (1979, p. 179). El nexo comercial de la sexualidad (por ejemplo, la «prometida», la dote, la «mujer mantenida», la amante, etc. [Salamon, 1984]) continúa influyendo en la interacción entre hombres y mujeres. En el extremo la prostituta es sólo un síntoma de una «esclavitud sexual femenina» más amplia (Barry, 1981), en la medida en que es encapsulada en un rol basado en la explotación o la victimización.

Más de 89 000 personas fueron detenidas por prostitución en los EE UU en 1978 (Ministerio de Justicia de EE UU, 1980); 19 000 más que en 1976⁵. Aunque los legisladores no realizan una

⁵ En Canadá, las detenciones de prostitutas disminuyeron un 82% entre 1974 y 1982, mientras que los agentes públicos buscaban nuevas soluciones. Un estudio nacional de 1985 promocionado por el Ministerio de Justicia (véase el Comité Especial sobre Pornografía y Prostitución, 1985) concluyó que la prostitución debería ser descriminalizada. En cambio, la policía ha incrementado el hostigamiento de prostitutas callejeras y en diciembre de 1985 se volvió al método de aplicar sanciones formales contra la presencia de prostitutas callejeras.

distinción formal entre hombres y mujeres y aunque la mayoría de los Estados prohíben las conductas de las dos partes, las mujeres aún constituyen el 68% de todas las detenciones por prostitución (Informes unificados sobre la delincuencia del FBI, 1979, p. 197). Otro 19% eran prostitutos masculinos y sólo un 10% eran clientes. Fueron detenidas más mujeres por prostitución que por la comisión de cualquier otro tipo de delito. Casi un 71% de todas las primeras detenciones de mujeres estaban relacionadas con la prostitución (Departamento de Justicia de EE UU, 1979, p. 464).

Las prácticas policiales discriminan a las mujeres de color y las de nivel social más bajo. En términos globales la mayoría de las detenciones recaen sobre las mujeres que trabajan en «la calle» (del 85 al 90%). A esta cifra se debe añadir la de aquellas mujeres que trabajan como prostitutas a partir de citas telefónicas (*call girls*) o para salas de masaje o servicios de compañía (Davis y Anderson, 1983). Mientras que aproximadamente el 40% de las prostitutas de la calle son mujeres de color, este grupo representa el 55% de las que son detenidas y un 85% de las que son condenadas (Alexander, 1980; Bressler y Leonard, 1978).

La prostitución infantil se nutre mayoritariamente del millón estimado de fugas anuales existente en los EE UU. Aproximadamente unas 200 000 son detenidas acusadas de fuga; otras 3 000 son arrestadas acusadas de prostitución, de las cuales cerca del 77% son niñas (Alexander, 1980). Muchas de estas prostitutas niñas trabajan de modo intermitente debido a que periódicamente son detenidas y encarceladas, devueltas a sus padres por la policía o refugiadas en centros de acogida. Un repaso a las investigaciones realizadas en los EE UU nos muestra que entre el 31 y el 66,7% de las jóvenes prostitutas han padecido relaciones incestuosas previas (Weisberg, 1985, caps. 4-5; véase también Armstrong, 1978). Muchas niñas pueden iniciarse en la prostitución porque aceptan el patrón de explotación o porque la víctima del incesto-prostituida recupera el control de la situación al exigir el pago de dinero (Herman, 1981). La política de detener adolescentes por el hecho de fugarse de casa puede también contribuir a su alienación y transgresión de la ley.

Se considera que el medio millón de prostitutas juveniles, según las estimaciones de que se dispone, son particularmente susceptibles de victimización (Alexander, 1980; Brown, 1979; véase Boyer y James, 1982). Éstas son incluso más vulnerables que las

prostitutas adultas a ser detenidas por largos períodos en la prisión juvenil (Sarri, 1976), a volverse dependientes del consumo de drogas ilícitas o alcohol, y a ser víctimas de crímenes violentos (Schur, 1984). Independientemente de la edad, las prostitutas callejeras denuncian varios riesgos laborales: agresiones físicas por parte de los clientes y los chulos, violación por parte de los clientes, perversiones forzadas, impago, robos, incumplimiento de los términos del contrato por parte del cliente y reparto injusto de las ganancias con el chulo. Este tipo de delitos son raramente denunciados a causa del proceso de autoinculpación que sufren las víctimas y de la indiferencia de la policía (Silbert y Pines, 1981, pp. 395-399). Las prostitutas son más susceptibles que las no prostitutas de ser víctimas de un homicidio, por su mayor movilidad, relaciones con hombres desconocidos y falta de vínculos sociales estables.

Algunas veces el homicida comete docenas de muertes antes de ser aprehendido por la policía. En Seale, Washington, las víctimas de «Green River» incluyen veintisiete mujeres, la mayoría de las cuales son prostitutas, mujeres de la calle o autoestopistas. Otras quince mujeres, probablemente víctimas, figuran en la lista de desaparecidos (*Seattle Post Intelligencer*, 16 de octubre de 1984).

La prostitución está íntimamente conectada con la industria urbana del ocio, de las ferias y congresos, la cual a menudo actúa con la complicidad de la policía local, y está legalizada *de facto* en las salas de masajes, servicios de compañía y otros negocios llevados por terceros que son los encargados de las licencias. Los clientes de las prostitutas por lo general son hombres de negocios convencionales de clase media, entre los 35 y los 50 años de edad, casados con hijos (Davis, 1978, pp. 195-222; Heyl, 1974). La necesidad económica es el estímulo que atrae a las mujeres al negocio del sexo, o la posibilidad de trabajar como modelos o artistas en la creciente industria pornográfica. Muchas de ellas acaban por dedicarse a tiempo completo a la prostitución (Alexander, 1980; Verlade, 1975, pp. 251-63).

Los detractores de la criminalización pertenecen ambos a grupos de mujeres y a reformistas legales. Estos grupos destacan que las actuales leyes y prácticas ejecutivas en contra de las prostitutas son:

1. *Injustas*: en tanto que incorporan una serie de creencias morales propias de los sectores conservadores, de los miembros

de las brigadas antivicio, de la «mayoría moral» y de los misóginos; y al propio tiempo ignoran otros intereses igualmente dignos de protección, los de las mujeres, los niños, los liberales y las feministas.

2. *Ineficaces*: pues la criminalización de la prostitución contribuye a complicar más la actual confusión legal en el sistema penal, en el cual los delitos menores consumen el tiempo de los tribunales, agotando los escasos recursos.

3. *Discriminatorias*: pues la policía tiende a detener a las prostitutas callejeras minoritarias y desaventajadas.

4. *Costosas*: dado que el castigo de la prostitución cuesta a los gobiernos de las ciudades millones de dólares anuales, y contribuye a que «entren en prisión por una puerta y salgan por la otra», haciendo que los delincuentes sean meramente reciclados a través de su paso por el sistema, saliendo a la calle al cabo de pocas horas, y devueltos poco después.

5. *Contraproducentes*: ya que la prostitución no puede ser erradicada, sino sólo controlada: la actual política penal más que reprimir desplaza la prostitución callejera (Cohen, 1980).

Las feministas radicales rechazan la legalización de la prostitución, la cual, dicen, desvía el control del chulo al del Estado. La legalización también legitima la explotación y el abuso de la mujer haciéndola aparecer como cualquier otro negocio. Pocas feministas desean perpetuar un sistema en el cual la victimización y la degradación juegan un papel tan importante. Desde una posición feminista, hasta que el estatus general de la mujer no se eleve y el empleo y las oportunidades de salario no sean iguales a las de los hombres, la prostitución continuará siendo una alternativa al trabajo mal pagado de muchas mujeres y debiera ser descriminalizada.

VI.6. *El Estado y la mujer en crisis*

A pesar de las anomalías de la intervención del Estado —su apoyo a la estructura social patriarcal, y la promulgación de algunas medidas de protección legal y derechos para las mujeres (Goldstein, 1981, pp. 5-28)— la mayoría de los grupos de mujeres buscan una alianza sólida con el Estado. Sus reivindicaciones hacen

referencia a la plena participación en la sociedad, incluyendo mayores oportunidades laborales e igual salario, programas de asistencia social adecuadamente financiados, expansión de centros de cuidado diurno, protección frente a la violación y malos tratos, justicia equitativa para las mujeres procesadas, descriminalización de la prostitución, acceso al aborto y a los medios anticonceptivos para todas las mujeres, independientemente de la clase social, raza o edad y un salario para las labores domésticas y trabajos sociales.

La actual crisis del control social sobre las mujeres se basa en la falta de apoyo del Estado y la confirmación de éste como un oponente de las mujeres. La exigencia feminista de igualdad de oportunidades y derechos ha sido silenciada en las sociedades capitalistas a causa de que la mujer permanece segregada por razón de clase, raza, sexo, etnia y religión. Más aún, estas divisiones han sido añadidas y promovidas por el mercado dominante y las instituciones estatales. Sólo hace falta observar, por ejemplo, la manera como el Estado se alía con la cruzada simbólica de los grupos más conservadores contra la liberalización de la prostitución y el aborto. Ello ha despertado una conciencia colectiva entre las mujeres que ha contribuido a la politización de sus necesidades comunes.

Desde la perspectiva de los intereses del Estado de mantener la hegemonía de los roles basados sobre el género, la imagen de la mujer como desviada está dando paso a la imagen de la mujer como amenaza política. Las campañas feministas se enfrentan a los mecanismos de control nuevos usados contra la mujer y este movimiento ha entrado incluso en la esfera del derecho. No puede ignorarse a las mujeres que critican el *apartheid* de los géneros en los años ochenta, cuando sus demandas por la igualdad están siendo reconocidas, como mínimo parcialmente, a través de la legislación promulgada por gobiernos de predominio masculino. La sociedad no tiene por qué contar con los desviados para legislar, pero sí tiene que considerar a la oposición, cuyos votos pueden afectar sus carreras políticas. Históricamente la transinstitucionalización de la mujer ha evolucionado de la autoridad patriarcal de la familia, al Estado del bienestar punitivo, al campo del derecho, en el cual se han conseguido victorias por la igualdad de derechos, en numerosos temas.

Uno de los desafíos a los cuales se enfrentan las juristas feministas consiste en persuadir a las mujeres de que así como la legis-

lación ha sido un factor principal de la opresión histórica de la mujer, puede también ser un medio para rectificar y superar las desigualdades⁶. Como Brophy y Smart sugieren, «es importante distinguir entre el derecho y los procesos legales para poder identificar las contradicciones que permiten espacio para el cambio» (1985, p. 17).

Los sistemas legales han sido mistificados por las mujeres en general. Usualmente se han concebido como un factor discriminador sistemático de la mujer, en parte porque las mujeres históricamente han sido excluidas de la creación, interpretación y aplicación de las leyes. Desde este punto de vista, los procesos legales han subvertido los intereses de las mujeres y han servido al Estado como agente de control social en su tarea de mantener a las mujeres «en su sitio» (Babcock, Friedman, Norton y Ross, 1975). Como innumerables litigios contemporáneos han demostrado, sin embargo, no existe nada inherente a la ley que efectivamente justifique o inevitablemente perpetúe esta injusticia estructural. Las feministas, incluyendo la mayoría de abogadas feministas, no sugieren que la transformación social revolucionaria pueda ocurrir mejor (o sólo) dentro de los parámetros del sistema legal, pero existe una propensión creciente de las mujeres a usar la ley en su lucha en contra de los vestigios de controles patriarcales. Bottomley, por ejemplo, defiende el uso de la ley para proteger los derechos de la mujer en parte basándose en que el derecho «[...] es una forma compleja y mutante que nos da algún espacio para luchar en el interior», y, al buscar la justicia a través del sistema legal «[...] estamos manteniendo la atención del público y rechazamos la privatización del conflicto, sea en las manos de las agencias asistenciales o en el peligroso ámbito privado» (1985, pp. 184-185).

Quizás el argumento más contundente que se puede realizar desde una perspectiva feminista es que un juicio en nombre de una mujer litigante o acusada es, en efecto, una defensa de todos los derechos de las mujeres dentro de una sociedad (Pask, Mahoney y Brown, 1985). A diferencia de las resoluciones informales

⁶ En Canadá se ha reforzado el optimismo sobre el uso del sistema legal como vehículo que conduce a la igualdad social gracias a la *Carta de derechos y libertades del Canadá*, abril de 1985, sección 15 (1), la cual declara: «Cada persona es igual ante y bajo la ley y tiene derecho a la protección y beneficio legal sin discriminación, y en particular sin discriminación por razón de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, incapacidad mental o física».

tradicionales de conflicto adoptadas privadamente (las cuales parecen garantizar más la mediación y conciliación de los conflictos individuales), el proceso formal ofrece la única vía a través de la cual los intereses de todas las mujeres pueden ser representados igualmente. Como ha reconocido Smart, incluso cuando el derecho no puede ser visto pragmáticamente como un medio neutral y objetivo para obtener la igualdad de derechos, el sistema legal es, sin embargo «[...] un sistema múltiple de regulación, que contiene sus propias contradicciones, y aún más significativamente, capaz de cambio y de influencia positiva más que de simple represión» (1984, p. 221). La objeción esencial, por supuesto, es que las tradiciones y las ideologías sexistas son predominantes tanto en las esferas formales como informales del control.

Las contradicciones en la aplicación de la ley relativas a los derechos de las mujeres, la controversia pública sobre estos desarrollos y el crecimiento de los grupos antifeministas como la Mayoría Moral y la «Real Equal Active for Live Women» (REALW), son indicadores históricamente reiterativos de la confusión social y el desacuerdo existente relativo a los roles basados en el género, a sus prerrogativas y responsabilidades. El debilitamiento estructural del monopolio masculino en la esfera pública conlleva conflictos cognitivos y cambios de comprensión traumáticos. La solución del conflicto sólo se puede manifestar a través de la reorganización de la estructura social, acompañada de cambios en el estatus de los diversos géneros.

La experiencia de la década venidera relativa a los derechos de las mujeres al control de sus propios cuerpos y a la plena participación en la ordenación y cambio social, determinará el futuro de la mujer en el siglo XXI. Si se reconstruye una ideología medianamente liberal, es previsible que las mujeres continúen siendo discriminadas negativamente desde el punto de vista económico, en base a la edad, raza y clase social, pero no serán tan duramente sancionadas por su género o preferencias sexuales. Si el presente crecimiento de la derecha se mantiene, la mujer puede esperar unos controles caracterizados por una mayor penalización e institucionalización de los comportamientos etiquetados como «desviados»; es decir, comportamientos que contradicen los roles basados en el género que se esperan de las mujeres. Este etiquetamiento neutraliza y distorsiona un fenómeno político, al definirlo como desviado. Institucionalizar la oposición en nombre de la sa-

lud, el bienestar, el tratamiento, el castigo y la seguridad pública implica un intento de silenciar la oposición. La reacción de las mujeres a este tipo de dominación podría crear una ruptura más profunda, acelerando un renovado ciclo de oposición. Sea cual sea el futuro, éste promete *no* ser sereno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alexander, P. (1980), *A Look at Prostitution*, San Francisco, National Task Force on Prostitution.
- Armstrong, L. (1978), *Kiss Daddy Goodnight*, Nueva York, Hawthorn Books.
- Babcock, B.; Friedman, A.; Norton, E., y Ross, S. (1975), *Sex Discrimination and the Law: Causes and Remedies*, Boston, Little, Brown and Company.
- Barrett, N. S. (1979), «Women in the Job Market: Unemployment and Work Schedules», en R. E. Smith (comp.), *The Subtle Revolution: Women at Work*, Washington, D. C., Urban Institute.
- Barry, K. (1981), *Female Sexual Slavery*, Nueva York, Avon Books.
- Bart, P. (1985), *Stopping Rape: Successful Survival Strategies*, Nueva York, Pergamon Press.
- Beck, B. (1977), «The Politics of Speaking in the Name of Society», Presidential Address, Society for the Study of Social Problems, reeditado en *Social Problems*, vol. 25, núm. 4, abril, pp. 353-360.
- Belle, D. (comp.) (1982), *Lives in Stress: Women and Depression*, Beverly Hills, Sage Publications.
- Bernard, J. S. (1981), *The Female World*, Nueva York, The Free Press.
- Blake, J. (1974), «The Changing Status of Women in Developed Countries», en *Scientific American*, vol. 231, septiembre, pp. 136-147.
- Bottomley, A. (1985), «What is Happening to Family Law? A Feminist Critique of Conciliation», en J. Brophy y C. Smart (comps.), *Women in Law: Explorations in Law, Family and Sexuality*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Boulding, E. (1976), *The Underside of History: A View of Women Through Time*, Boulder, Co., Westview Press.
- Boyer, D. y James, J. (1982), *Intervention with Female Prostitutes*, University of Washington, Department of Psychiatry and Behavioural Sciences.

- Bressler, L. y Leonard, D. (1978), *Women's Jail: Pretrial and Post-Conviction Alternatives*, se encuentra en UUSN, 1251 Second Avenue, San Francisco, Ca. 94122.
- Brophy, J. y Smart, C. (1985), *Women in Law: Explorations in Law, Family and Sexuality*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Brown, P. (1979), «Social Implications of Deinstitutionalisation», *Journal of Community Psychology*, vol. 8, pp. 314-322.
- Brownmiller, S. (1975), *Against our Will: Men, Women and Rape*, Nueva York, Simon and Schuster [*Contra nuestra voluntad*, Barcelona, Planeta, 1981].
- Brozan, N. (1985), «Jurors in Rape Trials Studied», *New York Times*, núm. 17, junio.
- Burton, C. (1985), *Subordination: Feminism and Social Theory*, Sydney, George Allen and Unwin.
- Carlen, P. (1983), *Women's Imprisonment: A Study in Social Control*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Chesley, P. (1972), *Women and Madness*, Nueva York, Avon.
- Chesney-Lind, M. (1977), «Judicial Paternalism and the Female Status Offender», en *Crime and Delinquency*, vol. 23, núm. 2, pp. 121-130.
- Clark, L. N. G. y Lewis, D. J. (1977), *Rape: The Price of Coercive Sexuality*, Toronto, Women's Press.
- Cohen, B. (1980), *Deviant Street Networks: Prostitution in New York City*, Lexington, Ma., D. C. Heath.
- Colker, R. (1983), «Pornography and Privacy», en *Law and Inequality: A Journal of Theory and Practice*, vol. 1, núm. 2, noviembre, pp. 191-237.
- Collins, R. (1971), «A Conflict Theory of Sexual Stratification», en *Social Problems*, vol. 19, verano, pp. 3-19.
- Coward, R. (1983), *Patriarch Precedents: Sexuality and Social Relations*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Daly, M. (1978), *Gyn/Ecology: The Meta Ethics of Radical Feminism*, Boston, Beacon Press.
- Danzinger, S.; Haveman, R., y Plotnick, R. (1980), «Income Transfer Programmes in the United States», *Federal Finance: The Pursuit of American Goals*, vol. 6, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office.
- Datesman, S. K. y Scarpitti, F. (1980), *Women, Crime, and Justice*, Nueva York, Oxford University Press.
- Davis, K. (1937), «The Sociology of Prostitution», *American Sociology Review*, vol. 2, pp. 746-755.
- Davis, N. J. (1977), «Feminism, Deviance and Social Change», en E. Sagarin (comp.), *Deviance and Social Change*, Beverly Hills, Sage Publications.
- (1978), «Prostitution: Identity, Career and Legal-Economic Enter-

- prise», en J. M. Henslin y E. Sagarin (comps.), *The Sociology of Sex*, Nueva York, Schocken Books.
- (1980), *Sociological Constructions of Deviance: Perspectives and Issues in the Field*, Dubuque, Iowa, W. C. Brown Publishers.
- y Anderson, B. (1982), «Gender, Crime and the Sociology of Knowledge: Uncovering Ideological Biases in an Academic Tradition», en R. B. Smith y P. K. Manning (comps.), *An Introduction to Social Research: Handbook of Social Science Methods*, vol. 1, Nueva York, Balingier Publishing Company.
- (1983), *Social Control: The Production of Deviance in the Modern State*, Nueva York, Irvington Publishers.
- Davis, N. J. y Keith, J. (1984), *Women and Deviance: Issues in Social Conflict and Change: An Annotated Bibliography*, Nueva York, Garland Press.
- Diamond, I. (1980), «Pornography and Repression: A Reconsideration», *Signs*, vol. 5, núm. 4, pp. 686-701.
- Dinnerstein, D. (1977), *The Mermaid and The Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise*, Nueva York, Harper and Row.
- Dobash, R. E. y Dobash, R. P. (1979), *Violence Against Wives: A Case Against the Patriarchy*, Nueva York, Free Press.
- (1981), «Community Response to Violence Against Wives», *Social Problems*, vol. 28, junio, pp. 563-581.
- Donnerstein, E. (1989) «Aggressive Erotica and Violence Against Women», en *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, núm. 2, pp. 269-277.
- Edwards, S. M. (1984), *Women on Trial*, Manchester, Manchester Press.
- Ellis, E. M.; Atkeson, B. M., y Calhoun, K. S. (1981), «An Assessment of Long-Term Reaction to Rape», en *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 90, pp. 263-266.
- Fox, M. F. y Hesse-Biber (1984), *Women at Work*, Palo Alto, California, Mayfield Publishing.
- Gibbons, D. C. (1984), «Forcible Rape and Sexual Violence» en *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 21, núm. 3, pp. 251-269.
- Goffman, E. (1959), *The Presentation of Self in Everyday Life*, Garden City, NY, Doubleday Anchor Books.
- Goldstein, L. F. (1981), «The Constitutional Status of Women: The Burger Court and the Sexual Revolution in American Law», en *Law and Policy Quarterly*, vol. 3, núm. 1, pp. 5-23.
- Griffin, S. (1981), *Pornography and Silence: Culture's Revenge Against Nature*, Nueva York, Harper and Row.
- Hacker, A. (comp.) (1983), *U.S.: A Statistical Portrait of the American People*, Nueva York, The Viking Press.
- Hartmann, H. (1976), «Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex», en *Signs*, vol. 1, núm. 3, parte 2, primavera, pp. 137-169.

- Hatch, A. y Faith, K. (1985), «The female offender in Canada», presentado en la Sociedad Americana de Criminología, San Diego.
- Herman, J. L. (1981), *Father-Daughter Incest*, Londres, OUP.
- Heyl, B. S. (1979), «Prostitution: An Extreme Case of Sex Stratification» en F. Alder y R. J. Simon (comps.), *The Criminality of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin.
- Holmstrom, L. L. y Burgess, A. W. (1983), *The Victim of Rape: Institutional Reactions*, Nueva York, John Wiley and Sons.
- Hutter, B. y Williams, G. (1981), *Controlling women: the normal and the deviant*.
- James, J.; Withers, J.; Haft, M., y Theiss, S. (1975), *The Politics of Prostitution*, Seattle, Social Research Associates.
- Kahn-Hut, R.; Daniels, A. K., y Colvard, R. (comps.) (1982), *Women and Work: Problems and Perspectives*, Nueva York, OUP.
- Klein, D. (1973), «The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature», en *Issues in Criminology*, vol. 8, otoño, pp. 3-30.
- Laws, J. L. (1979), *The Second X: Sex Role and Social Role*, Nueva York, Elsevier.
- Lederer, L. (comp.) (1980), *Take Back the Night: Women on Pornography*, Nueva York, William Morrow.
- Lévi-Strauss, C. (1949), *The Elementary Structures of Kinship*, Boston, Beacon Press [*Las estructuras elementales del parentesco*, Buenos Aires, Paidós].
- Mahoney, E. R. (1983), *Human Sexuality*, Nueva York, McGraw-Hill Book Company.
- McDermott, J. (1979), «Rape Victimisation in 26 American Cities», U. S. Department of Justice, Law Enforcement and Assistance Administration, Washington D.C.
- Millman, M. (1975), «She Did It All for Love: A Feminist View of the Sociology of Deviance», en M. Millman y R. M. Kanter (comps.), *Another Voice*, Nueva York, Doubleday Anchor Books.
- Oakley, A. (1976), *Woman's Work*, Nueva York, Vintage Books.
- Pask, E. D.; Mahoney, K. E., y Brown, C. A. (1985), *Women, the Law and the Economy*, Toronto, Butterworths.
- Rabkin, J. G. (1979), «Epidemiology of Forcible Rape», en *American Journal of Orthopsychiatry*, vol. 49, núm. 4, pp. 634-647.
- Ross, H. L. y Sawhill, V. (1975), *Time of Transition: The Growth of Families Headed by Women*, Washington D. C., Urban Institute.
- Roth, R. T. y Lerner, J. (1982), «Sex-Based Discrimination in the Mental Institutionalisation of Women», en D. K. Weisberg, *Women and the Law*, Cambridge, Ma., Schenkman Publishing Company Inc., pp. 107-140.
- Russell, D. E. H. (1975), *The Politics of Rape*, Nueva York, Stein and Day.
- Ryan, W. (1972), *Blaming the Victim*, Nueva York, Vintage Books.